JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 6 DE VALENCIA

Procedimiento Ordinario [ORD] - 000481/2021

SENTENCIA nº 373/2022

En la Ciudad de Valencia, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós.-

Vistos por mí, D. JOSE FENELLÓS PUIGCERVER, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º Seis de Valencia, los autos del Procedimiento Ordinario seguido con número 481 del año dos mil veintiuno, seguidos a instancia de la Procuradora [REDACTED], en nombre y representación de [REDACTED] con D.N.I. [REDACTED], contra la Diputación Provincial de Valencia, defendido por la Letrada de sus servicios jurídicos, siendo codemandado el Consorcio C3/V1, defendido por el Letrado [REDACTED], en impugnación de la resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, que desestimó el recurso interpuesto contra la exposición pública del padrón fiscal de la tasa de tratamiento del consorcio Camp de Morverdre, del año 2021, procede dictar sentencia en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, por la Procuradora [REDACTED], en nombre y representación de [REDACTED] se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia, recaída en el expediente con número 2021/1942, desestimatoria del recurso interpuesto contra la exposición pública del padrón fiscal de la tasa de tratamiento del consorcio Camp de Morverdre del año 2021.

SEGUNDO.- Admitido a trámite el recurso por Decreto de fecha siete de enero de dos mil veintidós, y previa reclamación del expediente administrativo, se dio traslado de éste a la parte demandante para que formalizara demanda, presentando en fecha cinco de abril de dos mil veintidós la Procuradora [REDACTED] en la representación señalada, escrito en el cual, por los hechos y argumentos que expuso, terminaba suplicando se dictara sentencia por la que se declarase la disconformidad a Derecho de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por valorización y eliminación de residuos urbanos del Consorcio "Plan Zonal de Residuos de las Zonas III y VIII", declarando la nulidad del Padrón fiscal de la Tasa de tratamiento del Consorcio Camp Morverdre para el ejercicio

2021 y de las liquidaciones giradas en aplicación del mismo, y condenara a la Administración demandada al pago de las costas.

TERCERO.- Por diligencia de fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós se dio traslado de la demanda a la Diputación Provincial de Valencia, y mediante escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por la Letrada de la misma se presentó escrito de contestación a la demanda, en el cual, por los motivos que expuso, solicitó la desestimación de la misma.

CUARTO.- Tras no contestar la parte codemandada interesada Consorcio de Residuos C3/V1 al escrito de demanda, se acordó recibir el procedimiento a prueba, admitiéndose como prueba la documental y emitidas conclusiones por las partes, quedó el pleito visto para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación de anulación de las liquidaciones de la tasa de tratamiento, valoración y eliminación de residuos, alegándose que la cuota atribuida al recurrente no se correspondía con el coste del servicio prestado, vulnerándose el principio de capacidad económica, por cuanto se estableció en la modificación que se operó en el año dos mil veinte un aumento del 20% de la cuota con respecto al ejercicio anterior, invocando la necesidad de cubrir supuestos déficits presupuestarios de la entidad, y sin valorarse la capacidad económica de los sujetos pasivos, imponiendo una cuota única para locales industriales de hasta mil metros cuadrados equivalente a siete veces la exigida para las viviendas sin regular exenciones y bonificaciones, ni ser proporcional a la cantidad de residuos generada, y ser igualmente vulnerado el principio de no discriminación derivado del tratamiento dispar de la tasa de valorización y eliminación de residuos urbanos efectuados por los distintos consorcios de la Diputación de Valencia en sus Ordenanzas Fiscales.

Pues bien, partimos de que no se niega la existencia de una Memoria económico-financiera cuando en el año 2020 se decidió modificar la ordenanza aumentando las cuotas de las tasas, ni se concreta y especialmente no se acredita en esta impugnación indirecta, que la misma no contuviera todas las precisiones y justificaciones del desarrollo articulado de la Ordenanza Fiscal, de modo que de su lectura se desprenda no sólo cual es el coste real o previsible del servicio en su conjunto, o, en su defecto, el valor de la prestación recibida, sino además la justificación razonada que ha llevado a la determinación, en su caso, de los criterios de cuantificación de la cuota para la elaboración de las liquidaciones, debiendo contener la explicación procedente que justifique el cumplimiento de los principios tributarios a los que hace referencia el artículo 31.3 de la Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico.

Debemos recordar que conforme señala la jurisprudencia, la aprobación de la Memoria económico-financiera constituye, no un mero requisito formal, sino una pieza clave para la exacción de las tasas y un medio de garantizar, justificar (el ente impositor) y controlar (el sujeto pasivo) que el principio de equivalencia se respeta, y, por ende, para evitar la indefensión del administrado ante actuaciones administrativas arbitrarias. Esos requisitos de contenido de la Memoria justificativa del acuerdo de imposición y de la Ordenanza Fiscal, tienen como finalidad establecer la motivación que llevó a la Entidad Local a ejercer la potestad reconocida en los artículos 15 y 20.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas locales, en cuanto al establecimiento de tasas, para tratar de asegurar que se ajustan, no solamente a los parámetros del artículo 24 de dicha Ley, sino también al resto del ordenamiento jurídico y, por tanto, se ha de justificar, aunque sea de modo aproximado, que la fijación de los elementos para la determinación de la cuota tributaria, en el caso de que se establezcan, resultan respetuosos con los principios de igualdad, justicia tributaria y, en su caso, capacidad contributiva. Con ello se trata de impedir que el establecimiento de las tasas y, por ende, el ejercicio de la potestad de establecerlos y regularlos, resulte arbitrario o, lo que es lo mismo, inmotivado. Es, en fin, una exigencia del mandato constitución de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución española; de lo contrario, carecerían los interesados de instrumentos para, en su caso, plantear alegaciones al respecto, tanto en el trámite de información pública como mediante la interposición de los recursos procedentes, frente a la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales, dejando con ello sin contenido artículos 17.1 y 19.1 de la ley de Haciendas Locales, ya que los interesados carecerían de los elementos necesarios para oponerse, por razones de legalidad, a los parámetros, en este caso coeficientes, establecidos para la liquidación de la cuota tributaria de la tasa.

Esto es, asiste la razón a la parte demandante cuando señala que en la memoria económica se debe contener el criterio por el cual se fija una cuantía, y no otra, para los locales industriales de hasta mil metros cuadrados como el que nos ocupa, como coste previsto del servicio prestado de obligatoria recepción y sufragado a través de la tasa, aun partiendo de que dichos residuos, ante la aleatoriedad de su cantidad, han sido no irrazonablemente cuantificados, en el presente supuesto, mediante la utilización de un factor objetivo, como es la condición de industrial o no de la actividad que se desarrolla en un local y la importancia de dicha actividad derivada de la extensión que ocupa donde realizarse y que permite deducir, proporcionalmente, la cantidad de basura que ello puede, por término medio, producir.

Pero en la presente litis no se ha demostrado, es más, repetimos, parece que se reconoce que existe, que no se contuviera en la ordenanza dicha memoria económica-financiera, ni se ha demostrado la irrazonabilidad concreta, en términos matemáticos y económicos, de dicha utilización del factor objetivo empleado e impugnado.

Nos hallamos pues ante una problema de carga probatoria, y es a la parte demandante, sujeto pasivo y accionante, a quien corresponde probar que dicha memoria económica, y la consiguiente ordenanza, carece de la debida motivación o no está suficientemente justificada. A la parte demandante, no al juzgador, al no constituir dicha memoria económica una norma de índole jurídico que pueda analizar conforme al principio iura novit curia. Y, en la presente litis, más allá de las generalidades contenidas en el escrito de demanda, no se ha demostrado, a través de una pericial económica u otro medio probatorio, que son inexactos o infundados los cálculos allí contenidos, que, repetimos, este juzgador, al no tratarse de norma jurídica, no entra de oficio a analizar, y cuyos concretos defectos, resaltando su redacción y justificación, tampoco son enunciados en el escrito de demanda de forma clara que posibilite que sin necesidad del auxilio técnico que proporciona la prueba pericial, pueda el juzgador tachar de inmotivado o irrazonable dicha fijación de las tarifas.

Y, siendo que la existencia de distintas tarifas en diversos consorcios en modo alguno carece de justificación, por el número de usuarios de sus servicios, la localización, accesos a vertederos y plantas de tratamiento, orografía de la zona, afección medioambiental, y demás factores, y siendo que, en definitiva, no ha quedado suficientemente probada la existencia de motivo de nulidad en la ordenanza fiscal aplicable, que es a su vez el motivo único de impugnación de la liquidación aprobada y notificada al recurrente a través de la exposición del padrón, procede desestimar la demanda interpuesta.

SEGUNDO.- Conforme al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, *“en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho... La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima.”*

En el caso que nos ocupa, siendo que la desestimación a la demanda ha sido íntegra, y no apreciando dudas fácticas ni jurídicas, procede condenar a su abono a la parte recurrente, si bien fijando en mil euros el límite de las mismas conforme a los criterios orientativos del Colegio de Abogados de Valencia de diciembre de dos mil catorce.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

FALLO

Que **DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE** el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora [REDACTED] en nombre y representación de [REDACTED] contra la Diputación

Provincial de Valencia, defendida por la Letrada [REDACTED], en impugnación de la Resolución de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación de Valencia, recaída en el expediente con número 2021/1942, desestimatoria del recurso interpuesto contra la exposición pública del padrón fiscal de la tasa de tratamiento del consorcio Camp de Morverdre del año 2021, que se DECLARA AJUSTADA A DERECHO, y CONDENO a la entidad demandante al abono de las costas procesales causadas, con un límite máximo de mil euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de QUINCE DÍAS desde su notificación, para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Se hace constar que la anterior Sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Magistrado-Juez que la suscribe, en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo cual doy fe.